

European Energy Poverty:

Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation

Llamada a la acción

Mayo 2020, con contribuciones de

Barbosa, R.; Barrella, R.; Bouzarovski, S.; Castaño-Rosa, R.;
Chatzikonstantinou, E.; Cornelis, M.; Dereniowska, M.; Dobbins, A.; Dubois,
U.; Gaydarova, E.; Grossmann, K.; Guyet, R.; Hanke, F.; Hesselman, M.;
Horta, A.; Jiglau, G.; Katman, F.; Katsoulakos, N.; Martín-Consuegra, F.;
Mattioli, G.; Mengolini, A.; Mohlakoana, N.; Robic, S.; Sagan, I.; Sareen, S.;
Sinea, A.; Stojilovska, A.; Thomson, H.; Tirado Herrero, S.; Varo, A.;
Vatavali, F.; Živčič, L.

Traducción al castellano: Tirado Herrero, S.; Castaño-Rosa, R.; Varo, A.;
Martín-Consuegra, F.



La crisis del coronavirus hará aumentar las cifras de pobreza energética: ¡Ha llegado el momento del derecho a la energía!

¿Te imaginas que, ante el anuncio de cuarentena, no tuvieras la opción de encender la televisión para poder informarte, no pudieras llamar a tu familia o tener un lugar dónde poder estar confortablemente? ¿Qué pasaría si cada vez que cocinas, o tu hija intenta conectarse para consultar sus deberes escolares, estuvieras preocupado por la factura de la luz? ¿Cómo estarías viviendo esta crisis si hubieras perdido tu trabajo?

La crisis de la COVID-19 está generando nuevos problemas en todos los países del mundo, independientemente del nivel de desarrollo económico, cultural o educativo de las comunidades. Somos un grupo de académicos y expertos en pobreza energética que creemos que el brote de coronavirus muestra una vez más que la energía es esencial para garantizar una vida segura, saludable y digna. Por esta razón pensamos que es necesario un debate a nivel europeo sobre el derecho a la energía y a los servicios energéticos básicos. Este debate debe ir acompañado de una sólida acción científica para afrontar la crisis actual, mitigar sus futuras consecuencias y fomentar la evolución hacia una nueva normalidad donde la pobreza energética se erradique a través de un Pacto Solidario para la Energía.

Impactos inmediatos de la crisis del coronavirus en los hogares en situación de pobreza energética en Europa

La pobreza energética es comúnmente entendida como [la incapacidad de asegurar unos niveles básicos de servicios energéticos en el hogar](#). Significa vivir en una casa que es imposible de calentar o refrigerar por los altos costes de las facturas, consecuencia de la combinación de una baja eficiencia energética, unos precios de la energía excesivos y unos bajos ingresos. Las personas que sufren pobreza energética son más vulnerables a ciertos riesgos para la salud, como son los [problemas respiratorios y de salud mental](#). La crisis actual conlleva un aumento de la situación de vulnerabilidad a padecer dichos riesgos. A medida que los factores que conducen a la pobreza energética se multiplican, la pandemia amplifica la necesidad de comprender mejor este fenómeno e identificar a las personas que lo padecen.

A medida que la crisis del coronavirus ha hecho mella en todo el planeta, las consecuencias se han hecho notar rápidamente. La recesión en curso, provocada por las medidas de confinamiento establecidas a escala global, profundiza las desigualdades preexistentes. Tras la emergencia sanitaria, la inseguridad laboral es probablemente el efecto más visible de la crisis. Sólo en Europa [las cifras de desempleo podrían llegar a duplicarse](#). Los trabajadores precarizados del sector minorista y el sector turístico han



sido las primeras víctimas de la interrupción brusca de la actividad económica. Por otro lado, estudios demuestran que la pobreza energética es un vector de problemas de salud mental. Este hecho se ve agravado por la situación de confinamiento que, no sólo ha provocado un impacto económico, sino que también ha supuesto un aumento de las situaciones de angustia emocional y ansiedad ante un futuro incierto.

Nuestras vidas han cambiado radicalmente. La crisis del coronavirus ha agravado las desigualdades de género, que a su vez están directamente vinculadas tanto a las [causas como a la experiencia vivida de la pobreza energética](#). La cuarentena ha provocado un aumento del uso de los servicios energéticos para la cocina, calefacción, refrigeración, actividad laboral y de ocio. En algunos países, se estima que el consumo de electricidad aumentará considerablemente en los hogares ([más del 10%](#)), lo que dará lugar a facturas energéticas más elevadas. Durante el confinamiento, las características de la vivienda y la unidad familiar importan aún más. Una vivienda con aislamiento deficiente, el uso de electrodomésticos de baja eficiencia energética, la imposibilidad de poder tener garantizado el acceso a suministros esenciales y el aumento del consumo de energía afectan de forma significativa al presupuesto de los hogares. En este contexto, fenómenos como el hacinamiento y la baja calidad de las viviendas son aún más evidentes. Esta crisis impacta drásticamente en la calidad de vida de la ciudadanía, aumentando la vulnerabilidad energética y las desigualdades sociales.

La red ENGAGER recoge una extensa [producción científica](#) y de [orientación de la política pública](#) sobre las causas y consecuencias de la pobreza energética en Europa (y otros territorios), mostrando la distribución social y espacial de los diferentes aspectos de vulnerabilidad. Sin embargo, las situaciones de pobreza energética preexistentes se han agravado. Parte de la sociedad no ha tenido más alternativa que pasar frío y vivir a oscuras, viéndose privados de servicios energéticos básicos como el agua caliente. Algunos hogares ya estaban afectados por la desconexión de suministros, y se vieron atrapados en esa situación sin opción a poder reconectarse, o bien tenían deuda acumulada con las empresas de suministro. A pesar de las medidas de emergencia puestas en marcha en muchos países, como la congelación de precios y tarifas, la suspensión de desconexiones o los subsidios directos, muchos hogares se están quedando atrás. En muchos casos las medidas de emergencia no han llegado a grupos minoritarios o infrarrepresentados. El distanciamiento físico obligado por la emergencia sanitaria ahonda las dificultades para buscar y recibir ayuda, ya sea por parte de los servicios sociales o de familiares y amigos. Más allá de la carga económica, este contexto de crisis también ejerce una presión adicional sobre la salud física y mental, incluso para aquellos que no han sido afectados directamente por la enfermedad del coronavirus. A largo plazo, y a medida que los ingresos se desplomen, los hogares afrontarán cada vez más dificultades para hacer frente a alquileres e hipotecas y aumentará el riesgo de desahucio.

A medida que la situación evolucione es muy probable que aparezcan nuevas dimensiones de la pobreza energética y que un mayor número de personas se vean afectadas de forma temporal o permanente. Los trabajadores autónomos y las pequeñas



y medianas empresas (PYME) también tendrán dificultades para pagar sus facturas, lo que puede poner en peligro la continuación de su actividad. Las familias se pueden ver obligadas a afrontar el dilema de tener que decidir entre prioridades y necesidades básicas como alimentación, energía, transporte, comunicación digital, etc. Es muy probable que una vez se levanten las prohibiciones temporales a la desconexión de suministros, los hogares más vulnerables no puedan afrontar los pagos atrasados que hayan acumulado.

Un pacto solidario para garantizar el derecho a la energía

La crisis que estamos viviendo demuestra el papel crítico de la energía en nuestra vida diaria. La pobreza energética resulta en la desconexión social, económica y política de las personas afectadas. En las actuales circunstancias no es aceptable que siga habiendo personas desconectadas y a oscuras. La pandemia corre el riesgo de socavar la cohesión social y la democracia debido a la creciente desconfianza en los gobiernos y responsables de la toma de decisiones. Es fundamental, por tanto, un pacto de solidaridad para proteger a las poblaciones más vulnerables contra las crisis actuales y futuras, para hacer frente a las crecientes desigualdades sociales y para situar la salud y bienestar humanos en el centro de la toma de decisiones. Reclamamos un reparto justo de los costes de la pandemia entre hogares, Estado y agentes económicos que incluya una protección ampliada de la población vulnerable. Pedimos también un esfuerzo adicional en investigación y desarrollo para comprender mejor las repercusiones de la crisis global en las poblaciones vulnerables afectadas por pobreza energética.

Es hora de plantear el derecho a la energía y a los servicios energéticos para toda la ciudadanía.

A corto plazo, los gobiernos necesitan urgentemente **mantener e incluso aumentar las medidas de apoyo económico y social para los más vulnerables**. Los mecanismos de solidaridad y los servicios sociales y de asesoramiento energético deben seguir funcionando con máxima eficacia, aunque operen a distancia. Es necesario adoptar medidas flexibles para mantener los ingresos de las personas que han perdido el trabajo o se enfrentan a una reducción temporal de empleo a fin de amortiguar el impacto inicial de la crisis y preservar la capacidad de compra de los hogares. El diseño de políticas fiscales debe orientarse a este objetivo. Hacen falta también políticas especialmente diseñadas para identificar hogares y empresas que no puedan pagar sus facturas debido a la crisis y se debe asegurar que tarifas sociales, subsidios y ayudas de pago único lleguen a quienes más los necesitan. Debería garantizarse que los consumidores tengan acceso estable a mecanismos de apoyo financiero a medida que aumentan su vulnerabilidad y gasto energético. Un fondo específico de pobreza energética, financiado por agentes como las empresas suministradoras, podría utilizarse para aliviar la deuda energética de los hogares y para garantizar que las familias puedan pagar sus facturas.

Es **necesario que los precios de la energía sean asequibles** no sólo para los consumidores vulnerables. Deben introducirse mecanismos para limitar o congelar



precios y tarifas sociales, o adaptar las existentes, para que los hogares vulnerables puedan cubrir sus necesidades. Hay también familias en dificultades que dependen de combustibles minoritarios (como el gasóleo para calefacción) con elevados impuestos y que no están incluidos en los sistemas de protección frente a la pobreza energética existentes. Deben por tanto aplicarse normas específicas para estas fuentes de energía durante la crisis provocada por la COVID-19.

Reclamamos que se prohíban los cortes de suministro energético. Los gobiernos deben [prohibir las desconexiones de suministro](#) más allá de la duración del estado de alarma y el confinamiento, por lo menos hasta que los consumidores afectados puedan resolver los pagos acumulados, preferiblemente por 5 años, y evitando al mismo tiempo que los hogares acumulen deuda con empresas suministradoras. Pueden también establecerse niveles mínimos garantizados de consumo de energía para asegurar que todos los hogares satisfagan sus necesidades básicas, especialmente las relacionadas con la emergencia sanitaria del coronavirus como el saneamiento, la higiene y el acceso a la información. A más largo plazo se plantea la conveniencia de introducir cambios legislativos de mayor calado para que las empresas suministradoras tengan que demostrar que no llevan a cabo cortes que causen daño o exclusión. Se deben establecer también mecanismos favorables de gestión e incluso cancelación de deuda energética doméstica en cooperación entre el gobierno, los reguladores y las empresas suministradoras.

La calidad de la vivienda es una cuestión urgente. Asegurar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna debería ser una prioridad en los planes de recuperación. La calidad de la vivienda va más allá de la eficiencia energética. Es urgente acelerar la rehabilitación térmica de edificios residenciales y, al mismo tiempo, [mantener el coste de la vivienda al alcance de todas las personas](#). La [ola de rehabilitación](#) propuesta para Europa debería ser justa e inclusiva para garantizar que incluso la población más desfavorecida pueda acceder a viviendas energéticamente eficientes. Las personas vulnerables deberían también tener acceso a las energías renovables y a electrodomésticos eficientes a precios asequibles. Debería exigirse una calificación energética mínima a todas las viviendas, en particular las del mercado de alquiler como propone la Directiva (UE) 218/844.

El pacto solidario contra la pobreza energética que proponemos contribuirá a la resiliencia ambiental y social de las sociedades europeas y llama a considerar la energía doméstica como un servicio esencial y un bien común, al igual que la atención sanitaria, la educación y la vivienda.